



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Sentencia Definitiva

Expediente N° 3214/2024

AUTOS: “DEL PLATA NEGOCIOS INMOBILIARIOS SRL c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los, , reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN ALBERTO FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Llegan las presentes actuaciones ante esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por “DEL PLATA NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.R.L” contra la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social –en adelante “el Ministerio”- N° RESOL-2023-35225-APN-DRLF#MT, por medio de la cual se desestimó el recurso deducido de impugnación administrativa contra la RESOL-2022-13436-APN-DRLF#MT, en la que se le impuso a la apelante un multa por la suma de \$ 63.192 por la infracción cometida al artículo 40 de la ley 11.683.

En su escrito recursivo la empresa “DEL PLATA NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.R.L” se agravia y sostiene que se intentó establecer que la empresa mantiene a una trabajadora en relación de dependencia sin la debida registración y declaración. Sostiene que la Sra. María Eugenia Valle Cantones -persona relevada- es en realidad una agente inmobiliaria relacionada con la firma a través de un contrato de agencia celebrado en fecha 13/05/2022 y el pago de un fee (carga) mensual, manteniéndose entre las partes un vínculo netamente comercial. Refiere que se ha acompañado la prueba documental correspondiente que avalaría sus dichos y que –según alega- no ha sido correctamente valorada. Para concluir, manifiesta que no existió entra la agente relevada y la empresa una relación de trabajo, en apoyo de sus dichos relata que no existió dependencia jurídica, técnica y económica, que permitan presumir lo contrario.

En primer término, cabe señalar que toda vez que se encuentra cumplido el requisito de admisibilidad dispuesto en el art. 15 de la Ley 18.820 y art. 10 inc b) de la Resolución del MTEySS n° 655/02 corresponde ingresar en el análisis fondal de la cuestión.

Ahora bien, según surge del acta de relevamiento (Ver constancia de inspección obrante a fs 43/46 del expte digital n° CSS 003214/2024/PDD01) el día 1 de junio de 2022 se hizo presente la inspectora del Ministerio MALM GREEN, JOSEFINA en la calle Malabia 1720, CABA, donde funciona la empresa relevada. Allí, en lo que aquí interesa, constató la presencia de la Sra. Valle Cantones, María Eugenia, de quién en



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

principio, el acta no constata ni denuncia dato alguno del que pueda presumirse una relación de dependencia, ya que no consigna remuneración alguna, fecha de ingreso se indica como el mismo día de la inspección, no denuncia jornada ni días y como tareas se enuncia que es “Coach”. Posteriormente el organismo -por medio de la verificación automática- constata que la Sra. Cantones no se encuentra registrada por la empresa relevada.

En atención a que no encuentro suficientemente acreditadas las notas tipificantes de una relación laboral, entiendo que asiste razón a la recurrente, robustece esta premisa la falta de un detallado análisis de la prueba documental acompañada del Expte. Nro. 2024-00463058– Expte. Completo, entre la que se advierte: Contratos de agencia suscriptos por la Sra. Canton y la empresa DEL PLATA NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.R.L., cartas de oferta, entre otros.

Asimismo, no es un dato menor que el propio Ministerio en otros supuestos de artistas similares, ha considerado que: “...teniendo en consideración las manifestaciones vertidas por la recurrente, los datos vertidos por las personas afectadas, la prueba documental aportada y las verificaciones efectuadas surgen dudas del vínculo dependiente entre las partes por lo que corresponde revocar la resolución en crisis y absolverla de la multa impuesta...” (Ver RESOL-2022- I 6955-APN-DRLF#MT).

“...Que...teniendo en cuenta las consideraciones vertidas en defensa de la imputada, las constancias de autos, la prueba documental arrojada (...) se genera en esta autoridad de aplicación un razonable margen de dudas como para imponer sanción, razón por la cual también se absuelve a la requerida de la multa que le correspondería por infracción a la Ley No 11.683...” (Ver RESOLUCIÓN D.R.F. No: 58100/2017).

“...que de las constancias de autos surgen razonables dudas respecto del carácter dependiente de la prestación de servicios constatada. Que si bien el artículo 23 de la ley 20.744 (Texto ordenado por decreto n° 390/76 y sus modificatorias) pone en cabeza del empleador el acreditar la inexistencia de vínculo laboral cuando, como en el caso de autos, se encuentra constatada la prestación de servicios, esta Autoridad entiende que estaba acreditado los agentes llevan a cabo a la organización empresarial a su propio riesgo, cabe tener por desvirtuada dicha presunción legal, en cuento de tal circunstancia puede inferirse el carácter comercial del vínculo. Que, por ello, se absuelve de la multa que correspondería toda vez que se ha logrado desvirtuar el contenido del acta de comprobación. (Ver Resolución DRF n°59525/2017).

Cabe destacar que las resoluciones previamente citadas han sido acompañadas en los autos “REMADEX S.A. c/MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA” (Expte. N° 30.036/2023); los



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

cuales han tramitado y he tenido a la vista por ante mí con motivo de su tramitación en esta Sala, y que fueran sentenciadas en fecha 21/11/2023.

Se puede constatar de la compulsa del expediente administrativo la declaración de la recurrente y documental acompañada que acreditarían la existencia de un vínculo comercial entre la empresa DEL PLATA NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.R.L. y la Sra. Canton Tal extremo ameritaba la necesidad de una mayor investigación a ésta, lo que me lleva a sostener que el organismo no ha agotado el procedimiento para dilucidar la cuestión ni ha procedido de forma idéntica a lo actuado en otros casos similares lo cual afectaría la garantía de igualdad prevista en el art. 16 de la C.N.

La presunción debe ser el punto de partida de un procedimiento de investigación exhaustivo, donde todas las pruebas necesarias para su comprobación se lleven a cabo. Resulta oportuno poner de manifiesto que existiendo hechos y pruebas contradictorias, el fisco no debió quedarse con los datos vertidos en el acta sino que por el contrario, en virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, la autoridad administrativa debió dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conducente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada, máxime cuando se denunciaron modalidades contractuales como el contrato de agencia, expresamente prevista en el Código Civil y Comercial desde el año 2015 en su artículo 1479 y siguientes.

Por lo tanto, será pura y exclusivamente una cuestión de hecho y prueba demostrar que los agentes involucrados, son en realidad trabajadores en relación de dependencia. Supuesto extremadamente sensible lo que requiere de parte de quien efectúa tal imputación el máximo de prudencia. Tener una visión completa de la situación hubiera exigido de parte del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, el exhaustivo análisis de la documental acompañada, a modo de constatar cuál era el verdadero vínculo entre los sujetos involucrados. Asimismo y solo a mayor abundamiento debería proceder de idéntica manera ante supuestos facticos y subjetivos idénticos. Por consiguiente, propicio se declare la nulidad del procedimiento incoado y dejar sin efecto las resoluciones dictadas en su consecuencia.

Finalmente, en cuanto a las costas, en atención a las particularidades presentadas en la causa y lo novedoso de la cuestión debatida, corresponde que se impongán las mismas por su orden.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Adhiero a la propuesta del Dr. Fantini.



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

No comparto la propuesta de mis colegas de Sala.

En autos la apelante cuestiona la Resolución Administrativa N° 35225 del 07 de noviembre de 2023 que al confirmar una anterior, le impuso una multa de \$ 63.192,00 por infracción al artículo 40 de la ley 11.683 al constatarse un incumplimiento al debido registro de alta de la Sra. María Eugenia Valle Cantones en ocasión de efectuarse una inspección en la sede de la imputada, ocasión en que se relevaron 3 trabajadores, pero una sin el alta correspondiente.

Concretamente, la impugnante expresa que la resolución atacada carece de razonabilidad, pues se acompañó en sede administrativa elementos probatorios que acreditan que Valle Cantones es una agente inmobiliaria con la que se vincula únicamente a través de una relación comercial, que no fue evaluada convenientemente a pesar de la prueba aportada.

Señala en su escrito impugnatorio que la mencionada persona es abogada, coach y ejerce su profesión en forma independiente, habiendo suscripto con la firma Del Plata Negocios Inmobiliarios S.R.L. un contrato de agencia el 13/05/2022 por el cual se relaciona profesionalmente con su parte.

Destaca, asimismo, que la presunción que emana del art. 23 LCT, y que la parte demandada pretende hacer valer, es simplemente iuris tantum por lo cual el organismo debió aceptar la inexistencia de subordinación jurídica, técnica y económica pues la agente relevada no depende de los ingresos que pudiera obtener de su relación con Del Plata Negocios Inmobiliarios S.R.L. sino que se trata de una empresaria, profesional independiente y con un establecimiento profesional propio en el domicilio que fija en sus facturas. Pide concretamente que se deje sin efecto la sanción de multa aplicada así como también la comunicación al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

El Ministerio demandado rechaza el planteo.

Explica que en realidad la actora no se presentó a la audiencia de descargo fijada para el 21/07/2022 declarándose su rebeldía, lo que determinó que perdiera la posibilidad de valerse de prueba testimonial, así como también acreditar el diligenciamiento de oficios o producir otro tipo de prueba tendiente a demostrar los hechos por ella invocados.

El apelante dio cumplimiento a la exigencia prevista en el artículo 15 de la ley 18.820, por lo que corresponde la habilitación de la presente instancia y proceder al conocimiento de la cuestión planteada.



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

La lectura de la causa revela que con fecha 01/06/2022 se llevó a cabo una inspección por funcionarios del Ministerio actuante en la calle Malabia 1720 de CABA donde desarrolla actividades la impugnante.

En dicha ocasión, fueron relevadas 3 personas, de las cuales el organismo entendió que una de ellas no se encontraba registrada en legal tiempo y forma.

La constancia de dicha inspección fue suscripta por Julia Malumian en carácter de socia gerente de la empresa inspeccionada.

Ahora bien, de la referida constancia de inspección surge que las notificaciones que curse el organismo deben ser efectuadas al domicilio fiscal. Entre ellas la comunicación a la audiencia de descargo, que también podrá ser consultada a través de servicio “e-ventanilla” de la página web de AFIP.

En el caso que nos ocupa DEL PLATA NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.R.L. no se presentó a la audiencia de descargo, decretándose su rebeldía perdiendo, de este modo, la posibilidad de producir prueba testimonial y acreditar el diligenciamiento de oficios.

En la impugnación presentada la apelante expresa que efectuó un descargo, en los términos del artículo 57 de la ley 10.149, ofreciendo a través de distintos medios probatorios elementos tendientes a demostrar la veracidad de los hechos denunciados por su parte.

No asiste razón a la quejosa.

Ello por cuanto resulta aplicable en la especie la Resolución 655/2005 del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social que, en su artículo 3º) última parte establece que el acta de comprobación que dará lugar a la apertura del sumario, se agregará a la actuación y su contenido será notificado fehacientemente al empleador por cualquiera de los medios previstos en el art. 100 de la ley 11.683 al domicilio fiscal del empleador. En caso de no contar con domicilio fiscal, se notificará en el domicilio legal o en el domicilio donde se efectuó la fiscalización, con lo que no puede invocarse ignorancia sobre lo actuado y el conocimiento de la citación a una posterior audiencia de descargo (art. 386 CPCCN).

Por su parte, el mencionado art. 100 inciso g) de la ley 11.683 prevé las formas en que deben practicarse las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago etc. Entre ellas menciona la comunicación en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente o responsable en las formas, requisitos y condiciones que establezca la AFIP.

Ello así, no puede el impugnante argüir ignorancia sobre la obligación que pesaba sobre su parte respecto a la audiencia designada a fin de demostrar la veracidad de los hechos invocados.



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Cabe recordar que la referida Resolución 655/05 en su art. 7º establece que la prueba de la que intente valerse el imputado se deberá ofrecer y producir en la audiencia de descargo prevista en el art. 3º inciso d) de dicha resolución, correspondiéndole a él sin excepción alguna la carga de aquella.

En el mismo acto, la autoridad de aplicación dispondrá la producción de la prueba ofrecida que resulte conducente para la resolución de las actuaciones, rechazando en forma fundada, aquella manifiestamente improcedente, superflua o meramente dilatoria.

En igual sentido la ley 18.695, a través de su articulado dispone que en la audiencia de descargo el imputado podrá argumentar todo lo que estime conveniente en beneficio de su postura, sea negando la veracidad de los hechos documentados en el acta, su presunta antijuridicidad y falta de tipicidad e, incluso, cuestionar la validez y legitimidad del proceso iniciado.

La falta de comparecencia del imputado a la audiencia de descargo permite que sea declarado en situación de rebeldía procesal y autoriza a la emisión de la resolución final. Es por ello que el sumariado deberá ofrecer al momento de la audiencia la prueba que estime conveniente para su defensa. Si no lo hace caduca su derecho a ofrecerla y la autoridad de control puede declarar la causa de puro derecho y emitir la resolución que entienda corresponde (conf. Pirolo, Miguel Ángel “Derecho Laboral. Derecho Procesal del Trabajo- Derecho Administrativo Sancionatorio del Trabajo, TºIV pág. 777 y sgtes. Editorial La Ley).

En la causa obran, además de las resoluciones administrativas cuestionadas y las actas de inspección y comprobación, únicamente la constancia de inscripción ante AFIP de Valle Cantones, con fecha de inicio de actividades en mayo de 2022, para servicios personales NCP (no clasificado previamente) y servicios jurídicos así como la credencial de abogada y condición de coach ontológica profesional pero no se acompañó documentación que la acredite como corredora inmobiliaria, martillero o similar. Tampoco se acompañó inscripción en el registro profesional respectivo.

Planteada así la cuestión, y más allá del ofrecimiento de prueba formulado por la presentante ante esta Alzada judicial, lo decidido en la instancia a quo deviene ajustado a derecho por no observarse violentado el derecho al debido proceso adjetivo del impugnante (conf. art. 1º inciso f. 2. de la ley 19.549).

En virtud de lo expresado y, atendiendo a la naturaleza de la situación planteada en autos entiendo que las costas deberán ser impuestas en el orden causado (art. 68 2do. párrafo CPCCN).



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Con base en lo antes expresado propongo: 1º) Habilitar la presente instancia judicial, 2º) Confirmar la resolución recurrida, 3º) Imponer las costas en el orden causado (art. 68 2do. párrafo CPCCN).

En mérito de lo que resulta del acuerdo de la mayoría, el Tribunal **RESUELVE**: 1) Habilitar la presente instancia judicial. 2) Declarar la nulidad del procedimiento incoado y dejar sin efecto las resoluciones dictadas en su consecuencia. 3) Costas en el orden causado, atento las particularidades presentadas en la causa y lo novedoso de la cuestión debatida.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

WALTER FABIAN CARNOTA

Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE

Juez de Cámara

ANTE MÍ:

SANCHEZ MOSCOSO JOSE MARIA

Prosecretario de Cámara

JSM